



Señores  
**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL**  
San Bernardo – Nariño  
Sede Civil – Especial  
E. S. D.

REF:

<b>Proceso:</b>	Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual
<b>Demandante:</b>	Jesús Urbano Muñoz
<b>Demandados:</b>	Luis Alberto Monge Muñoz y otros
<b>Radicación:</b>	2024 – 00075-00

**ASUNTO:** Contestación de la demanda

**JORGE ARMANDO LASSO DUQUE** mayor de edad, domiciliado y residente en Cali D.E., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.638.193 expedida en Cali, abogado titulado, en ejercicio y provisto de la tarjeta profesional No. 190.751 del Consejo Superior de la Judicatura, representante legal y abogado inscrito de la firma **BTL LEGAL GROUP S.A.S.**, sociedad comercial, identificada con NIT. 900.708.572-6, entidad que funge como mandataria judicial de los señores **LUIS ALBERTO MONGE MUÑOZ**, mayor de edad, domiciliado en Pasto (Nariño), identificado con la cedula de ciudadanía No 16.732.494; **CHRISTIAN DAVID VALLEJO ROJAS**, mayor de edad, domiciliado en Pasto (Nariño), identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.085.329.511; y la **IPS SAN FELIPE S.A.S.**, sociedad comercial, con domicilio principal en la ciudad de Pasto (Nariño), identificada con el NIT. 900.544.001-7, representada legalmente por Luis Alberto Monge Muñoz o quien haga sus veces, de conformidad con los poderes especiales que se adjuntan con este escrito, dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** presentada por el señor **JESÚS URBANO MUÑOZ**, quien actúa a través de apoderado judicial, en contra de mis representados, en los siguientes términos:

**FRENTE A LOS HECHOS**

**FRENTE AL PRIMERO: ES CIERTO.** De las pruebas obrantes en el expediente se puede verificar que el 12 de enero de 2024 se presentó un accidente de tránsito que involucro a los vehículos de placas GDT868 y placas SJP991.

**FRENTE AL SEGUNDO: ES CIERTO.** El vehículo de placas GDT868, para el momento de los hechos, era conducido por Christian David Vallejo Rojas.

**FRENTE AL TERCERO: ES CIERTO.** El vehículo de placas GDT868 es de propiedad de Luis Alberto Monge Muñoz.

**FRENTE AL CUARTO: ES CIERTO.** El vehículo de placas GDT868 se encontraba afiliado a la IPS San Felipe S.A.S.

**FRENTE AL QUINTO: NO ES CIERTO.** Las circunstancias de modo en que ocurrió el accidente NO corresponden a las que se narran en este hecho, toda vez que, contrario a lo manifestado por el extremo

activo, Christian David Vallejo Rojas, en su calidad de conductor del automotor de placas GDT868, al momento del impacto, no venía en circulación por el sentido contrario de la vía, y mucho menos, existe prueba que determine la existencia de alguna infracción normativa por parte este conductor, en el ejercicio de su actividad.

Pese a ello, no puede pasar inadvertido para el Despacho la orfandad probatoria con la cual la parte actora pretende acreditar la dinámica del accidente, ya que no obra en el plenario elemento material alguno más allá del simple dicho del mismo demandante.

Como en este caso, el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban la actividad peligrosa de conducir, se elimina cualquier presunción de culpa, evento en el cual le asiste a la parte demandante demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual. De tal suerte, le compete a la parte actora, conforme lo establece el artículo 167 del C.G.P. y 2341 del Código Civil, acreditar una conducta culposa y única causa eficiente de los daños graves que indica haber sufrido el vehículo de placas SJP991 de propiedad del señor Jesús Urbano Muñoz.

**FRENTE AL SEXTO: NO NOS CONSTA.** Lo narrado en este hecho corresponde a los presuntos dichos, sin verificar ni contradecir, de un tercero ajeno a mis representados. En este sentido, le corresponde a la parte demandante probar este hecho en virtud de lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso.

**FRENTE AL SÉPTIMO:** Debido a que se hacen diversas afirmaciones en este hecho, nos permitimos dividirlo así: A) Frente a los daños que sufrió el vehículo de placas SJP991 afiliado a la empresa de TRANSPORTES SANDONA S.A. y; B) Frente a que el vehículo de placas SJP991, por recomendación de Luis Alberto Monge Muñoz, fue remolcado y llevado a un taller de su confianza.

**FRENTE AL SÉPTIMO A: NO ES CIERTO.** Como se indicó anteriormente, no es cierto que los daños que sufrió el vehículo de placas SJP991, presuntamente afiliado a la empresa de TRANSPORTES SANDONA S.A., con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de enero de 2024, son producto de un actuar imprudente por parte de Christian David Vallejo Rojas, como conductor del vehículo de placas GDT868, pues no existen pruebas que acrediten tal afirmación y deberá la parte actora, por los medios útiles e idóneos, demostrar la responsabilidad que se pretende atribuir a la parte pasiva, así como los daños materiales que se indican haberse ocasionado.

No puede pasar inadvertido para el Despacho la orfandad probatoria con la cual el extremo demandante pretende acreditar la afirmación concerniente a que fue el conductor del vehículo de placas GDT868 quien invadió el carril en el que se desplazaba el vehículo de placas SJP991 por un presunto “exceso de velocidad” del automotor, ya que no obra en el plenario elemento material alguno el cual demuestre la presunta responsabilidad que se predica. Por lo tanto, se torna necesario indicar que, en el caso concreto, se deben valorar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la gradación del riesgo en la actividad desplegada de cada vehículo. Lo anterior, en razón a la falta de comprobación de la causa precisa que provocó el accidente, situación demostrada por la carencia probatoria que existe, lo cual evidencia la clara intención de la demandante de inducir al Juez a un error respecto a circunstancias que atienden a supuestos y meros dichos infundados.

**FRENTE AL SÉPTIMO B: NO ES CIERTO.** Luis Alberto Monge Muñoz no recomendó remolcar el vehículo de placas SJP991 del lugar de los hechos hasta el Municipio de Pasto, y mucho menos, que

dicho rodante fuera llevado a un taller de su confianza. Lo indicado en este hecho corresponde a dichos subjetivos de la parte demandante, sin verificar ni contradecir, de un ajeno a mis representados. En este sentido, le corresponde a la parte demandante probar este hecho en virtud de lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso.

**FRENTE AL OCTAVO: NO NOS CONSTA.** Mis representados no tiene relación sustancial alguna con el señor Jesús Urbano Muñoz, pues sólo tienen conocimiento de este por la ocurrencia del accidente de tránsito; en tal sentido, es totalmente ajeno a su conocimiento los presuntos daños causados al automotor de placas SJP991 y el costo de la presunta reparación. Adicionalmente, la parte demandante ha dejado claro que no ostenta la calidad de propietario del vehículo en mención, por lo cual, no está legitimado para reclamar el pago de alguna indemnización derivada del accidente que ocupa la atención del despacho. En este sentido, debe quedar claro que la prueba idónea para acreditar la propiedad de un vehículo es el certificado de tradición del bien mueble (vehículo); documento público que no puede ser sustituido por otro, como lo prescribe el artículo 256 del CGP, toda vez que se trata de un requisito *ad substantiam actus*. En materia de vehículos automotores, por disposición del Art. 47 de la Ley 769 de 2002, propietario es aquella persona que aparezca inscrita en el registro del respectivo organismo de tránsito. De igual forma, el Art. 922 del C. Comercio dispone que la tradición del dominio de los vehículos, se produce por medio de su entrega material y el registro de la venta o contrato en la oficina administrativa competente. De igual modo, las resoluciones 4775 de 2009 y 12379 de 2012 establecen de forma obligatoria el registro como instrumento para acreditar la transferencia de la propiedad del vehículo, siendo el certificado de tradición el único documento con la capacidad jurídica de acreditar la titularidad del bien.

De otro modo, la parte actora hace referencia a los daños materiales que sufrió el rodante el vehículo de placas SJP991 como producto de una presunta imprudencia por parte de Christian David Vallejo Rojas, conductor del vehículo de placas GDT868, sin embargo, no existen pruebas que acrediten tal afirmación y deberá la parte actora por los medios útiles e idóneos demostrar la responsabilidad que se pretende atribuir a la parte pasiva, así como los daños materiales que se indican haberse ocasionado.

3

Así pues, conforme lo indicado, le corresponde a la parte demandante probar este hecho en virtud de lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso.

**FRENTE AL NOVENO: NO NOS CONSTA.** Mis representados no tiene relación legal o contractual con la parte demandante, por tanto, desconocen los presuntos ingresos dejados de percibir por este. En todo caso, tal y como se viene indicando, el demandante no está legitimado para solicitar la indemnización que pretende en el presente proceso judicial, pues ni para la fecha de los hechos, ni en la actualidad ostenta la calidad de propietario del vehículo de placas SJP991. Las circunstancias narradas en el presente hecho, así como los presuntos daños deberán ser probadas por la parte actora, conforme lo dispone el artículo 167 del C.G.P.

**FRENTE AL DÉCIMO:** Debido a que se hacen diversas afirmaciones en este hecho, nos permitimos dividirlo así: A) Frente a la inmovilización del vehículo de placas SJP 991 en el taller de confianza de Luis Alberto Monge Muñoz y; B) Frente al trámite de reparación y/o indemnización por parte de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

**FRENTE AL DÉCIMO A: NO ES CIERTO.** Luis Alberto Monge Muñoz no recomendó llevar el vehículo de placas SJP991 a un taller de su confianza en búsqueda de una reparación, motivo por el cual, lo narrado en este hecho corresponde a los presuntos dichos, sin verificar ni contradecir, de un tercero ajeno a mis representados. En este sentido, le corresponde a la parte demandante probar este hecho en virtud de lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso.

**FRENTE AL DÉCIMO B: NO NOS CONSTA.** Lo indicado en este hecho corresponde a dichos subjetivos de la parte demandante, sin verificar ni contradecir, de un tercero ajeno a mis representados. En este sentido, le corresponde a la parte demandante probar este hecho en virtud de lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso.

**FRENTE AL DÉCIMO PRIMERO: NO NOS CONSTA.** Mis representados no tiene relación legal o contractual con la parte demandante, por tanto, desconoce los presuntos gastos de traslado en los que tuvo que incurrir. En todo caso, tal y como se viene indicando, el demandante no está legitimado para solicitar la indemnización que pretende en el presente proceso judicial, pues ni para la fecha de los hechos, ni en la actualidad ostenta la calidad de propietario del vehículo de placas SJP991. Las circunstancias narradas en el presente hecho, así como los presuntos daños deberán ser probadas por la parte actora, conforme lo dispone el artículo 167 del C.G.P.

**FRENTE AL DÉCIMO SEGUNDO: NO NOS CONSTA.** Mis representados no tiene relación legal o contractual con la parte demandante, por tanto, desconocen los presuntos ingresos dejados de percibir por este. En todo caso, tal y como se viene indicando, el demandante no está legitimado para solicitar la indemnización que pretende en el presente proceso judicial, pues ni para la fecha de los hechos, ni en la actualidad ostenta la calidad de propietario del vehículo de placas SJP991. Las circunstancias narradas en el presente hecho, así como los presuntos daños deberán ser probadas por la parte actora, conforme lo dispone el artículo 167 del C.G.P.

**FRENTE AL DÉCIMO TERCERO:** Debido a que se hacen diversas afirmaciones en este hecho, nos permitimos dividirlo así: A) Frente a la afectación patrimonial por concepto de daño emergente y lucro cesante que dice haber sufrido el demandante y; B) Frente la presunta responsabilidad que pretende endilgar la parte actora en cabeza de la parte pasiva como generador de dicha afectación material.

**FRENTE AL DÉCIMO TERCERO A: NO NOS CONSTA.** Mis representados no tiene relación legal o contractual con la parte demandante, por tanto, desconocen si el vehículo de placas SJP991 estaba vinculado a alguna empresa para la prestación del servicio público de transporte y mucho menos, si como consecuencia del accidente de tránsito referenciado se generó algún tipo de perjuicio.

En todo caso, la parte demandante ha dejado claro que no ostenta la calidad de propietario del vehículo en mención, por lo cual, no está legitimado para reclamar el pago de alguna indemnización derivada del accidente que ocupa la atención del despacho. En este sentido, debe quedar claro que la prueba idónea para acreditar la propiedad de un vehículo es el certificado de tradición del bien mueble (vehículo); documento público que no puede ser sustituido por otro, como lo prescribe el artículo 256 del CGP, toda vez que se trata de un requisito ad *substantiam actus*. En materia de

vehículos automotores, por disposición del Art. 47 de la Ley 769 de 2002, propietario es aquella persona que aparezca inscrita en el registro del respectivo organismo de tránsito. De igual forma, el Art. 922 del C. Comercio dispone que la tradición del dominio de los vehículos, se produce por medio de su entrega material y el registro de la venta o contrato en la oficina administrativa competente. De igual modo, las resoluciones 4775 de 2009 y 12379 de 2012 establecen de forma obligatoria el registro como instrumento para acreditar la transferencia de la propiedad del vehículo, siendo el certificado de tradición el único documento con la capacidad jurídica de acreditar la titularidad del bien.

En el presente proceso la parte demandante ha fallado con su deber de probar los perjuicios que se le ha causado, desconociendo que la doctrina y jurisprudencia han establecido que el perjuicio debe ser cierto para que se pueda indemnizar. Por ello, no se puede condenar al pago de perjuicios que no gozan de certeza ya que ello conllevaría a un enriquecimiento sin justa causa.

La carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso implica en materia de responsabilidad que aquel que ha sido perjudicado, que es quien conoce plenamente los daños que ha sufrido, debe poner de presente los medios conducentes para conocer su existencia y extensión, sin que se dé por cumplida con su carga probatoria cuando hace meras afirmaciones sin respaldo sobre los perjuicios que se supone que sufrió.

**FRENTE AL DÉCIMO TERCERO B: NO ES CIERTO.** Tal y como se indicó en hechos anteriores, no es cierto que la responsabilidad del accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de enero de 2024 se pueda atribuir a Christian David Vallejo Rojas, como lo pretende la parte actora; no existe prueba cierta que acredite que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones del conductor del vehículo de placas GDT868. Pues como ya se indicó, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la responsabilidad civil deprecada. Por esa razón, no podrá entenderse probado un nexo causal entre los daños alegados por la parte demandante y las conductas desplegadas por el conductor del vehículo de propiedad del señor Luis Alberto Monge Muñoz. En tal sentido, le compete a la parte actora, conforme lo establece el artículo 167 del C.G.P. y 2341 del Código Civil, acreditar una conducta culposa y única causa eficiente de los daños graves que indica haber sufrido el vehículo de placas SJP991 de propiedad del demandante.

**FRENTE AL DÉCIMO CUARTO:** Debido a que se hacen diversas afirmaciones en este hecho, nos permitimos dividirlo así: A) Frente a la existencia del contrato de seguros de automóviles que ampara al vehículo de placas GDT868 y; B) Frente a la objeción al reclamo expedida por la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

**FRENTE AL DÉCIMO CUARTO A: ES CIERTO.** El vehículo de placas GDT868 se encuentra amparado bajo la póliza de automóviles No 900000973260 expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., con una vigencia comprendida entre el 31 de agosto de 2023 y el 12 de mayo de 2024. El mencionado contrato de seguros cuenta con el amparo que se denomina “Daños a



terceros”, a través del cual se ampara la responsabilidad civil extracontractual del tomador/asegurado y conductor asegurado.

**FRENTE AL DÉCIMO CUARTO B: NO NOS CONSTA.** Ninguno de mis representados ha sido destinatario de la reclamación que se señala en este hecho. Lo manifestado es totalmente ajeno a su conocimiento, por lo cual, nos atenemos al contenido de la prueba documental que se aporte sobre el particular. En este sentido, le corresponde a la parte demandante probar este hecho en virtud de lo dispuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso.

#### **FRENTE A LAS PRETENSIONES**

**NOS OPONEMOS DE MANERA FRONTAL** y con fundamento en las excepciones de fondo que propondré más adelante, ante la inexistencia de culpa directa o indirecta con relación a los perjuicios materiales solicitados por la parte demandante, objeto y me opongo de manera general a todas las declaraciones, pretensiones y condenas en contra de la parte demandada, toda vez que de conformidad con las circunstancias bajo las cuales se dieron los hechos, no existe responsabilidad ni fundamento de imputación alguno que sea atribuible a Christian David Vallejo (conductor del vehículo placas GDT868), ello por cuanto no existe responsabilidad ni fundamento de imputación alguno que sea atribuible al extremo pasivo, así como tampoco existe prueba de los perjuicios reclamados por la parte demandante.

- a. **Falta de legitimación en la causa por activa:** La parte demandante no está legitimada para solicitar la indemnización que pretende en el presente proceso judicial, pues ni para la fecha de los hechos, ni en la actualidad ostenta la calidad de propietario del vehículo de placas SJP991.
- b. **Colisión de actividades peligrosas que derivan en la existencia de una presunción de culpa en cabeza del demandante y del demandado:** El extremo demandante no acreditó la culpa atribuible al conductor del vehículo de placas GDT868 en la producción del accidente y, a su vez, omitió su carga de desvirtuar la presunción de culpabilidad que pesa sobre el extremo demandante.
- c. **No se configuran los elementos probatorios que logren acreditar la existencia de responsabilidad en cabeza del conductor del vehículo de placas GDT868:** La parte actora no prueba la responsabilidad del conductor del vehículo de placas GDT868 en el accidente de tránsito. El único documento que se aporta en ese sentido es un registro fotográfico después de la colisión de los dos vehículos, aspecto que carece de tener un valor probatorio absoluto, en los términos en que lo plantea la parte demandante, pues esta solo se basa bajo una hipótesis de supuestos de responsabilidad, sin que pueda perderse de vista que se ha dado una colisión de actividades peligrosas en el presente caso.
- d. **Valor probatorio de las fotografías como medio para acreditar la responsabilidad civil:** Sobre la posible valoración de las fotografías que fueron allegadas al proceso por el demandante, y que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho, debe precisarse que éstas sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la

época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.

- e. **Hecho exclusivo de la víctima que impide la imputación del daño a los demandados:** El conductor del vehículo de placas SJP991 se transportaba transgrediendo las normas de tránsito previstas en la Ley 769 de 2002, siendo quien provocó los daños alegados, en la medida que la causa fundamental del accidente de tránsito obedeció a sendos descuidos de este.
- f. **Inexistencia del daño:** No existe evidencia alguna sobre el perjuicio que la demandante haya sufrido en su patrimonio. La parte actora no ha logrado acreditar la relación directa que debe existir entre la acción u omisión en cabeza de la parte pasiva, como hecho lesivo, y su afectación patrimonial; principalmente porque no hay certeza sobre la existencia de dicha afectación. Las pruebas que adosa el demandante no dan cuenta de los dineros que se indica salieron de su patrimonio, tampoco que no ingresaron a su patrimonio como consecuencia del hecho, y mucho menos, que le hayan afectado directamente al demandante, por no ser el propietario del vehículo.
- g. **Inexistencia del lucro cesante:** La parte actora no prueba de forma eficiente que ha sufrido una mengua en su patrimonio, ni que sus ingresos han disminuido a raíz del accidente, pues las pruebas documentales aportadas por la parte demandante son objeto de contradicción, motivo por el cual no se pueden declarar como un hecho cierto.

**FRENTE A LA 1: NO OPONEMOS.** Toda vez que la causa adecuada y exclusiva de la producción del daño no es atribuible a la conducta desplegada por el señor Christian David Vallejo Rojas, como conductor del vehículo de placas GDT868, pues esta no guarda nexo de causalidad con el daño, ni la parte actora logra probarlo, y por el contrario, la causa determinante del daño obedeció única y exclusivamente al actuar imprudente, negligente e imperito del mismo demandante, quien con su conducta violentó las disposiciones normativas consagradas en la Ley 769 de 2002. Situación que imposibilita predicar responsabilidad en cabeza de Luis Alberto Monge, en su calidad de propietario del vehículo de placas GDT868 y la IPS San Felipe S.A.S., entidad con la que existía un vínculo contractual para la prestación del servicio de ambulancia.

Al respecto, vale la pena decir que en el análisis realizado a las pruebas que acompañan la demanda, no se observó en el expediente ninguna que permita demostrar o acreditar la ocurrencia de los hechos aducidos en el escrito introductorio con relación a la responsabilidad del conductor del vehículo de placas GDT868. Es decir, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente de tránsito no se encuentran acreditadas al interior del plenario, puesto que no existe documento o registro alguno que constate que el accidente acaeció bajo las condiciones expuestas por el extremo actor, soslayando dicho supuesto factico al escenario de lo incierto. En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil es necesario que concurran los siguientes elementos: i) hecho generador, ii) daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto, puesto que no existe prueba idónea que acredite un nexo de causalidad entre la conducta desplegada por el conductor del vehículo asegurado y los daños que hoy reclama la demandante.

**FRENTE A LA 2. NOS OPONEMOS.** Porque al no existir responsabilidad en cabeza de ninguno de mis representados, y al estar ante una ausencia probatoria que permita acreditar que el actuar del señor Christian David Vallejo Rojas fue la causa determinante del daño, no existen fundamentos fácticos y jurídicos para obligar a la parte pasiva a cancelar unos perjuicios materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante, es decir, la presente acción carece de la producción del daño antijurídico, del hecho dañoso acaecido de forma culpable y del nexo causal entre ambas partes, motivo por el cual no es suficiente que la declaratoria de responsabilidad propuesta por la demandante prospere dentro del presente litigio. Por otra parte, recordemos que los perjuicios materiales deben gozar de certeza mediante elementos probatorios los cuales son ausentes en el presente proceso. Por último, por cuanto el demandante no se encuentra legitimado para reclamar las eventuales pérdidas sufridas, dado que no acredita su calidad de propietario del vehículo de placas SJP991.

**FRENTE A LA 3. NOS OPONEMOS.** Porque al no existir responsabilidad en cabeza del extremo pasivo, no existen fundamentos fácticos y jurídicos para obligar a la parte pasiva a cancelar a favor de la parte demandante intereses sobre la suma que pretende como indemnización, pues no existe obligación alguna en cabeza de la parte pasiva.

**FRENTE A LA 4.** Nos oponemos y, por el contrario, solicitamos que se condene a la parte actora al pago de las costas y agencias en derecho en favor de mis representados.

#### **OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO**

De conformidad con el Art. 206 del Código General del Proceso, nos permitimos presentar **OBJECCIÓN Y OPOSICIÓN** frente al juramento estimatorio presentado por el apoderado judicial de la parte actora por su tasación errada e inexacta, ya que, de acuerdo con lo manifestado, las sumas pretendidas carecen de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que permitan generar obligación alguna en cabeza de mis representados.

8

Se desprende del contenido del Art. 206 del Código General del Proceso que el juramento estimatorio debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Estimación razonada.
2. Bajo juramento.
3. Discriminando cada uno de sus conceptos.

El incumplimiento de lo antes señalado conllevará a la ausencia de un requisito formal para la presentación de la demanda, lo cual configura una causal de inadmisión de la misma, y de advertirse una estimación notoriamente injusta, ilegal o con fraude, corresponderá al juez decretar las pruebas pertinentes.

Sobre lo anterior, ha indicado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:



*La discriminación de cada uno de los conceptos implica desglosar cada uno de los montos particulares que componen la cuantificación global realizada, y acreditar que la suma de cada uno de dichos conceptos arroja como resultado el valor global estimado.<sup>1</sup>*

Dentro del presente proceso se tiene que la parte actora reclama el valor \$60.315.000, sin que indique la fórmula matemática aplicada para arribar a tal suma o el desglose de los valores que componen las mismas, lo que inequívocamente lleva al incumplimiento del requisito establecido para la correcta aplicación del juramento estimatorio presentado.

Aunado a lo anterior, se tiene que la suma pretendida por la parte actora carece de medios probatorios que las sustenten, en tanto de las documentales aportadas con la demanda, no dan cuenta de los valores señalados por el actor, en los montos reclamados.

La orfandad probatoria frente a estos perjuicio es evidente, dado que no se acredita cuáles eran las expectativas contractuales concretas que tenía el actor con respecto al vehículo, las que presuntamente se frustraron con ocasión al evento dañoso, no se aportan contratos para la prestación de servicios de transporte que indiquen cual era el valor efectivamente pagado por el uso del mismo, y que con posterioridad al evento accidental se tuviese la expectativa o compromiso contractual de seguir ejecutando tales obligaciones.

El demandante debía estimar y demostrar, cuáles eran los gastos fijos que generaba el rodante con regularidad y que podría haber generado con posterioridad al evento reclamado, los cuales deben ser descontados del supuesto valor percibido, para así obtener la ganancia frustrada, tales como pago al conductor del vehículo, los peajes, la gasolina, los repuestos, los gastos por mantenimiento y el pago del seguro obligatorio y demás pólizas de responsabilidad exigidas, entre otros que se generan indudablemente por el rodamiento de cualquier vehículo en condiciones normales.

Cabe aclarar que con las anteriores manifestaciones no se le reconoce valor probatorio alguno a las documentales aportadas con la demanda, pues de lo dicho se recoge que las mismas carecen por completo de idoneidad y pertinencia respecto del objeto que se pretende probar, siendo analizadas únicamente ante la ausencia total del cumplimiento de la carga que le asistía al actor, de discriminar los conceptos reclamados y señalar las fórmulas de cálculo aplicadas para arribar a los valores totales que pretende le sean reconocidos.

Por todo lo anterior, como quiera que no se cumple con los estándares mínimos del artículo 206 del CGP, debido a la carencia de elementos fácticos, jurídicos y probatorios, que permitan evidenciar que en cabeza de la demandante recae el derecho de obtener el pago de una indemnización a cargo de mi representada, los valores señalados por el actor no podrán ser tenidos en cuenta como estimación de los perjuicios reclamados, solicitamos de manera respetuosa que se aplique las sanciones del artículo 206 del CGP en contra de la parte demandante.

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto Exp: AC2422-217, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, 19 de abril de 2017.

## **FRENTE A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Por NO asistirles razón jurídica a los demandantes, niego y me opongo al derecho que pretendan invocar como fundamento de las pretensiones.

## **EXCEPCIONES DE FONDO**

### **FRENTE A LA VINCULACIÓN PROCESAL**

#### **- FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE JESÚS URBANO MUÑOZ**

La legitimación en la causa determina quienes deben o pueden demandar y a quien se debe o se puede demandar, por tanto, **es necesario al momento de iniciar un proceso judicial en contra de otra parte, que el actor acredite estar legitimado jurídicamente para hacerlo.**

La Jurisprudencia Constitucional ha definido esta facultad procesal como la “*calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso*”<sup>2</sup>, de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella.<sup>3</sup>

En este caso, la parte demandante ha dejado claro en los hechos de la demanda que no ostenta la calidad de propietario del vehículo de placas SJP991, por lo cual, no está facultado para reclamar el pago de alguna indemnización derivada del accidente que ocupa la atención del despacho.

10

En este sentido, debe quedar claro que la prueba idónea para acreditar la propiedad de un vehículo es el certificado de tradición del bien mueble (vehículo); documento público que no puede ser sustituido por otro, como lo prescribe el artículo 256 del CGP, toda vez que se trata de un requisito *ad substantiam actus*. En materia de vehículos automotores, por disposición del Art. 47 de la Ley 769 de 2002, propietario es aquella persona que aparezca inscrita en el registro del respectivo organismo de tránsito. De igual forma, el Art. 922 del C. Comercio dispone que la tradición del dominio de los vehículos, se produce por medio de su entrega material y el registro de la venta o contrato en la oficina administrativa competente. De igual modo, las resoluciones 4775 de 2009 y 12379 de 2012 establecen de forma obligatoria el registro como instrumento para acreditar la transferencia de la propiedad del vehículo, siendo el certificado de tradición el único documento con la capacidad jurídica de acreditar la titularidad del bien.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es claro que el demandante carece de legitimidad para reclamar los presuntos daños ocasionados por la ausencia de prueba que acredite la propiedad respecto del automotor frente al que se reclama el presunto daño ocasionado.

---

<sup>2</sup> Sentencia T-416 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

<sup>3</sup> Sentencia C-965 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

- **COLISIÓN DE ACTIVIDADES PELIGROSAS: NECESIDAD DE ACREDITAR LA CULPA EN CONTRA DE QUIEN SE ENDILGA RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE**

Dentro del presente caso no existen razones ni pruebas que permitan concluir que la responsabilidad, en este caso, sea atribuida al conductor del vehículo de placas GDT 868, vale la pena llamar la atención sobre los elementos de convicción y argumentación que exige este caso.

Nos encontramos ante un escenario especial de cara a la responsabilidad civil, en la medida en que las dos partes involucradas en el accidente de tránsito se encontraban ejecutando una actividad peligrosa. En estos eventos, tanto demandante como demandado, están ejecutando al mismo tiempo actividades que se han considerado como peligrosas, circunstancia en la cual, el juez debe considerar ambas conductas como peligrosas, sin que una actividad absorba la otra.

Así las cosas, nos encontramos en un caso donde **la presunción de culpa se encuentra en cabeza de las dos partes del proceso**. Esta consideración se encuentra apoyada por la postura que ha manejado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia actual, a saber:

*“Tratándose de accidente de tránsito producido por la colisión de dos automotores, cuando concurren a la realización del daño, **la jurisprudencia ha postulado que estando ambos en movimiento, estarían mediados bajo la órbita de la presunción de culpas**.”<sup>4</sup>(Negrita fuera del texto).*

Lo anterior se traduce en que la parte que solicita la indemnización de un perjuicio no debe conformarse con acreditar la ocurrencia del hecho y del daño que presuntamente reportó con ocasión al accidente, sino que tiene la obligación de desvirtuar la presunción de culpa que existe sobre el involucrado cuyos intereses representa el extremo demandante. De este modo, corresponde a ambas partes probar la diligencia en su actuar. Lo anterior, encuentra asidero en la siguiente consideración de la Corte Suprema de Justicia:

*“La concurrencia de las dos actividades peligrosas en la producción del hecho dañoso y el perjuicio, en nada obsta para que la parte demandante, acudiendo a las reglas generales previstas en el artículo 2341 del Código Civil, pruebe la culpa del demandado, como aquí ocurrió”<sup>5</sup>*

---

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 06 de mayo de 2016. Radicación No. 2004-032. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

<sup>5</sup> Ibidem

- **AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE ESTRUCTURAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han afirmado que los elementos que estructuran la Responsabilidad Civil Extracontractual en general son: el hecho, atribuyéndolo a la conducta desplegada por el demandado, el daño y el nexo de causalidad entre el primero y el segundo, siendo un elemento adicional, según el estadio de la responsabilidad en el que nos situemos, acreditar la culpa del demandado.

Sobre el particular ha señalado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señalando:

*La causalidad es un concepto que permite reconocer, de entre una pluralidad de acontecimientos, aquél o aquéllos que hacen posible la producción de un resultado (...) no siempre la causalidad física coincide con la causalidad jurídica, toda vez que en el campo del derecho la cadena causal no se toma en su estricto sentido naturalista, sino que se encuentra impregnada de una serie de valores culturales que permiten escoger, de entre una serie de hechos, sólo aquéllos que resultan verdaderamente relevantes para endilgar responsabilidad; de ahí que se hable de una causalidad adecuada. (...) Ahora bien, para establecer es nexo de causalidad es preciso acudir a las máximas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al buen sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil.” (C.S.J. Sala Civil. Dic 9 de 2013. M.P. Ariel Salazar.).*

De conformidad con lo anterior, para que se pueda predicar responsabilidad civil en cabeza del demandado se requiere que haya un hecho, entiéndase conducta ya sea activa u omisiva del agente, y que en el mismo se presentó un comportamiento mediato o inmediato de quien se relaciona como responsable. En este marco, es claro que sin que haya un hecho en el cual se desplegó una conducta activa u omisiva de por medio de parte de quien se le imputa ser responsable, no podrían estructurarse los elementos de la responsabilidad.

12

Ahora bien, en el caso bajo estudio es claro que el demandante no acredita la existencia de los elementos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual, que permita imputar responsabilidad en cabeza de los hoy demandados, pues no allega prueba que permita corroborar que el hecho se atribuye a la culpa al conductor del vehículo de placas GDT868, ni mucho menos que en el mismo se hubiere presentado un comportamiento mediato o inmediato de este, su propietario o IPS, derivados de una acción u omisión, y si bien es cierto, se acredita la existencia de un daño, el mismo no se puede imputar a la parte pasiva por ausencia de relación causal.

Lo anterior, evidencia una ausencia total de pruebas de la parte de la demandante de los elementos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual, circunstancia que imposibilita la imputación y declaratoria de responsabilidad en cabeza de los hoy demandados. Razón por la cual, es imposible atender favorablemente las pretensiones del hoy demandante.

- **AUSENCIA DE ELEMENTOS DE PRUEBA QUE LOGREN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE CULPA EN CABEZA DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACAS GDT 868**

De conformidad con lo expuesto en la excepción anterior, para que se pueda predicar responsabilidad civil en cabeza del extremo pasivo, en síntesis, se requiere que haya un hecho, esto es, una conducta activa u omisiva del agente, es decir, que se pruebe la existencia de un hecho y que en el mismo se presentó un comportamiento mediato o inmediato de quien se relaciona como responsable (nexo causal). En este marco, es claro que sin que haya un hecho en el cual se desplegó una conducta activa u omisiva de por medio de parte de quien se le imputa ser responsable, no podrían estructurarse los elementos de la responsabilidad.

De conformidad con lo anterior, la parte demandante tiene la carga procesal de acreditar los elementos de convicción suficientes para que el juez pueda establecer una mayor culpabilidad en el actuar del extremo demandado. Sin embargo, el extremo demandante omitió esta carga argumentativa y probatoria y, por el contrario, se presentó al proceso sin demostrar que la causa del daño se le debe atribuir a la parte pasiva.

Del escrito de demanda se evidencia que la parte demandante fundamenta todas las valoraciones de culpa sobre meras hipótesis y registro fotográfico después de la colisión de los dos vehículos, aspectos que carecen del valor probatorio que le ha otorgado la parte demandante, pues de ninguna manera puede valer como un dictamen de responsabilidad o siquiera puede contener hipótesis de responsabilidad.

La valoración subjetiva que plantea la parte demandante no es suficiente ni idónea, toda vez que quien lo expone es la misma parte interesada, lo cual no atribuye certeza de los presupuestos fácticos del accidente, ni mucho menos responsabilidad alguna.

13

Con todo lo anterior queda claro que, los fundamentos probatorios que soportan los hechos de la demanda carecen de elementos necesarios, indispensables e indivisibles de prueba. Por tanto, fracasa cualquier intento de acreditar el suceso a través de dichos medios de prueba. De este modo, por su ausencia de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del accidente recae en cabeza del conductor del vehículo de placas GDT 868, pues es clara la ausencia de culpa atribuible a este y consecuentemente de los demás demandados, lo que, bajo el régimen que debemos tomar en este caso, debe tener por consecuencia la inexistencia de responsabilidad y por contera del pago de la indemnización solicitada.

- **AUSENCIA DE RELACIÓN CAUSAL**

La relación de causalidad es un requisito necesario para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas, pues no es posible atribuir las consecuencias que prevé la ley para la responsabilidad civil si no es posible vincular a un agente con el hecho y daño alegados.



El examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño, o, en otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que para que sea posible declarar responsabilidad civil extracontractual debe estar probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...”. (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible.”<sup>6</sup>*

La parte demandante tiene la carga procesal de acreditar los elementos de convicción suficientes para que el juez pueda establecer la existencia de un actuar culposo del conductor del vehículo de placas GDT 868, sin embargo, la misma no consideró necesario acatar ese deber y se limitó a elaborar un escrito de hechos y pretensiones, sin carga argumentativa o probatoria que conlleve a probar la ocurrencia del hecho dañoso, ni mucho menos a la determinación de la existencia de culpa del conductor del señor CHRISTIAN DAVID VALLEJO ROJAS, lo que indispensablemente deriva en inexistencia de obligación de parte de mi representado como propietario del automotor.

14

Del escrito de demanda, se evidencia que la parte demandante omite fundamentar la culpa del conductor del vehículo de placas GDT 868 respecto al accidente, limitándose a señalar o probar de forma eficiente bajo experticia la ocurrencia del evento, sin señalar cual fue la violación a las normas de tránsito en las que se incurrió, que conllevaron a que se presentara el accidente narrado, ni que tiene que ver causalmente con el accidente mi representada también demandado dentro de este proceso. Limitándose exclusivamente a versiones subjetivas y registro fotográfico que no tienen la suficiencia para demostrar las circunstancias reales de ocurrencia del evento, motivo por el cual solo se basa en meras hipótesis.

Con todo lo anterior queda claro que, los fundamentos probatorios que soportan los hechos de la demanda carecen de elementos necesarios, indispensables e indivisibles de prueba, por tanto, fracasa cualquier intento de acreditar el suceso a través de dichos medios de prueba, debido a la ausencia de elementos de convicción suficientes que lleven al juez a determinar que la responsabilidad del accidente recae en cabeza del conductor del vehículo de placas GDT 868, pues es clara la ausencia de culpa atribuible a este, lo que,

---

<sup>6</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez.

bajo el régimen que debemos tomar en este caso, debe tener por consecuencia la inexistencia de responsabilidad y por contera del pago de la indemnización solicitada.

En este caso particular el demandante no acreditó el nexo causal entre la conducta ejecutada por el señor CHRISTIAN DAVID VALLEJO ROJAS y el daño alegado en el escrito de demanda, la conducción de un vehículo es una actividad peligrosa, pero no genera una presunción automática que pueda eximir al demandante de acreditar la conducta activa u omisiva ejecutada por el conductor que aportó causalmente en la realización del daño sufrido.

- **CAUSA EXTRAÑA QUE IMPIDE LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO A LA PARTE DEMANDADA**

**a. La relación de causalidad**

La relación de causalidad es un requisito necesario para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas, pues no es posible atribuir las consecuencias que prevé la ley para la responsabilidad civil si no es posible vincular a un agente con el hecho y el daño alegados.

El examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño, o, en otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que para que sea posible declarar responsabilidad civil extracontractual debe estar probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

**“En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...”** (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible.”<sup>7</sup>

En este caso particular quedará probado que no existe nexo causal entre la conducta del extremo demandado y el daño alegado en el escrito de demanda, en la medida que se presentó una causal clara de exoneración de responsabilidad.

---

<sup>7</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez.

## SUBSIDIARIA FRENTE RESPONSABILIDAD CIVIL

### - CONCURRENCIA DE CULPAS

A pesar de que existen razones suficientes para concluir que la responsabilidad del hecho que hoy se demanda es atribuible al conductor del vehículo de placas SJP991, vale la pena llamar la atención sobre los elementos de convicción y argumentación que exige este caso.

Al referirnos al hecho de tránsito objeto de esta demanda, sería necesario aplicar los principios de la responsabilidad directa con culpa probada establecida en el artículo 2341 del Código Civil, por cuanto, si bien es cierto que el vehículo de placas GDT868 era conducido por el señor CHRISTIAN DAVID VALLEJO ROJAS, igualmente el vehículo de placas SJP991 estaba siendo maniobrado bajo un actuar peligroso, es decir que ambos involucrados se encontraban realizando una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos automotores, por lo tanto, ambos estarían bajo la presunción de culpas.

Así las cosas, en este tipo de circunstancias nos encontramos en un caso donde **la presunción de culpa se encuentra en cabeza de dos partes del proceso**. Esta consideración se encuentra apoyada por la postura que ha manejado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia actual, a saber:

*“Tratándose de accidente de tránsito producido por la colisión de dos automotores, cuando concurren a la realización del daño, **la jurisprudencia ha postulado que estando ambos en movimiento, estarían mediados bajo la órbita de la presunción o concurrencia de culpas.**”<sup>8</sup>(Negrita fuera del texto)*

16

Lo anterior, se traduce en que le corresponde al operador judicial establecer cuál de las actividades peligrosas fue la causa determinante del daño que se reclama por la parte actora, y, por ende, al encontrar que dos o más actividades involucradas en el evento tiene relación directa y determinante con la causación del daño que se reclama, deberá así declararlo imponiendo en cada una de ellas su porcentaje de responsabilidad.

## FRENTE A LA TASACIÓN DE PERJUICIOS

### - INEXISTENCIA DE PRUEBA ACERCA DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE

En el presente proceso la parte demandante ha fallado con su deber de probar los perjuicios que se le ha causado, desconociendo que la doctrina y jurisprudencia han establecido que el perjuicio debe ser cierto para que se pueda indemnizar. Por ello, no se puede condenar al pago de perjuicios que no gozan de certeza ya que ello conllevaría a un enriquecimiento sin justa causa.

---

<sup>8</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 06 de mayo de 2016. Radicación No. 2004-032. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

La carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso implica en materia de responsabilidad que aquel que ha sido perjudicado, que es quien conoce plenamente los daños que ha sufrido, debe poner de presente los medios conducentes para conocer su existencia y extensión, sin que se dé por cumplida con su carga probatoria cuando hace meras afirmaciones sin respaldo sobre los perjuicios que se supone que sufrió.

Por lo tanto, le solicitamos de manera respetuosa señor juez que desestime las pretensiones condenatorias elevadas por la parte demandante

#### - INEXISTENCIA DE LUCRO CESANTE

En este proceso no se atendió la carga probatoria de quien sufre un perjuicio, esto es, lo correspondiente a los soportes que den cuenta del supuesto detrimento que sufrió el demandante en su patrimonio a raíz del accidente ocurrido el 12 de enero de 2024.

El lucro cesante, de conformidad con la Corte Suprema de Justicia:

*“[...] es entonces la privación de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho”<sup>9</sup>*

La certeza, entonces, es el fundamento del lucro cesante<sup>10</sup> y en este orden de ideas, la parte demandante debe imprimirle a su petición un grado de certeza tal que el juez pueda determinar que efectivamente el hecho dañino le ocasionó la pérdida de un beneficio económico cuantificable.

17

Contrario a lo anterior, la parte demandante solo afirma que perdió una presunta utilidad derivada de la ocurrencia del accidente, aportando algunos recibos de transporte y una certificación de contador, sin aportar extractos bancarios, ordenes de servicio, contratos suscritos con las entidades a las cuales les efectuaba el servicio de transporte, declaraciones de renta entre otros, que en efecto puedan dar cuenta del valor devengado previo a la ocurrencia del accidente.

Por las razones aquí esbozadas, **el lucro cesante solicitado por la parte actora es incierto e inexistente**, de ahí que no se podrá condenar a los demandados al pago de este perjuicio.

#### - INEXISTENCIA AL DAÑO EMERGENTE

En relación con este tipo de perjuicio material, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara al determinar que éste debe ser cierto y real, no eventual e hipotético. El daño emergente, hace referencia a las sumas de dinero que salen “del patrimonio del afectado para atender las consecuencias del impacto directo que signifi-

<sup>9</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC11575-2015 del 31 de agosto de 2015.

<sup>10</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de agosto de 2013. Rad. No. 11001-3103-003-2001-01402-01. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda.

el menoscabo”<sup>11</sup>, es el “más cierto de todos los daños patrimoniales, por cuanto parte de la base de un desembolso efectivo o de un menoscabo tangible”<sup>12</sup>. En este sentido, es necesario que **el demandante pruebe los gastos en los que incurrió a raíz del daño causado.**

De este modo, se advierte que sólo pueden considerarse como daño emergente aquellos valores que cierta e inequívocamente hayan salido del patrimonio de la víctima, lo que implica que ésta tiene la carga de acreditar probatoriamente que realmente incurrió en gastos con ocasión al hecho dañino.

En efecto, si la persona que pretende la indemnización de este perjuicio no aporta ningún medio de prueba que dé muestra de la existencia de la erogación, no es procedente el reconocimiento del referido perjuicio, pues de hacerse tal decisión sería contrario al ordenamiento jurídico.

Como ya se ha mencionado, la parte actora no puede pretender el pago reclamado a título de daño emergente, debido a la falta de legitimación del señor Jesús Urbano en lo que respecta a la propiedad del vehículo de placas SJP991.

El demandante allegó al plenario copia de facturas y recibos de cotizaciones que no comprueban que dichos rubros hayan sido ocasionados en razón del accidente de tránsito del pasado 12 de enero de 2024 y mucho menos que hayan salido de su patrimonio, situación que no cumple con los presupuestos procesales pertinentes para que dicho perjuicio sea reconocido a favor de la parte demandante.

Por todo lo anterior, es claro que no es posible despachar favorablemente la pretensión elevada por la parte actora por esta tipología de perjuicio, atendiendo a los criterios legales y jurisprudenciales que regulan el caso concreto, debido a la ausencia de certeza del valor reclamado.

#### - IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS

La parte actora solicita el pago de intereses moratorios, siendo ésta una solicitud totalmente improcedente.

La mora se genera por el retardo en el cumplimiento de una obligación, lo que implica que para que ésta surja, necesariamente la obligación debe ser exigible al deudor. Conforme al artículo 1080 el pago del siniestro procede una vez acreditado el derecho ante la aseguradora, situación que no ha ocurrido en el presente caso.

A la parte pasiva no se le ha hecho exigible obligación alguna de pago de una indemnización a favor del demandante, pues la ocurrencia del siniestro no constituyó automáticamente su responsabilidad, por ello no es posible condenarla al pago de unos intereses cuando no ha incurrido en mora.

En consecuencia, deberá absolverse a mi representada de este concepto.

---

<sup>11</sup> Corte Suprema de Justicia\_ Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de agosto de 2014. Rad. No. 11001 31 03 003 1998 07770 01. M.P. Margarita Cabello Blanco.

<sup>12</sup> Ibíd.



## GENERALES

### - COBRO DE LO NO DEBIDO

Dado que no existe ninguna obligación pendiente por parte de mi representado, cualquier pretensión en contra de esta parte procesal deriva en un cobro de lo no debido, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.

### - PRESCRIPCIÓN

Sin que implique reconocimiento alguno, en cuanto esta excepción sea aplicable en el presente proceso, basada en el transcurso del tiempo contado a partir desde cuando se hicieron exigibles las obligaciones correspondientes.

### - COMPENSACIÓN

Sin que implique reconocimiento alguno, en cuanto esta excepción sea aplicable en el presente proceso, basada en el descuento de los pagos que hayan sido realizados por mi representada, otra aseguradora u otra persona.

### - LA GENÉRICA O ECUMÉNICA

Sírvase Señor Juez declarar las excepciones de fondo que resulten debidamente probadas, aunque no hayan sido alegadas, de conformidad con el principio *Iura Novit Curia* (Es un aforismo latino, que significa literalmente “*el juez conoce el derecho*”, utilizado en derecho para referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas).

## PRETENSIONES

Respetuosamente le solicito a usted Señor Juez, se sirva declarar probadas las excepciones aquí propuestas, eximiendo en virtud de ello de toda responsabilidad indemnizatoria a mi representada en relación con las pretensiones incoadas por la demandante.

Corolario de lo anterior, le pido al señor Juez condene al actor al pago de las costas y agencias en derecho, toda vez que con su accionar manifiestamente infundado pusieron en movimiento el aparato judicial y trabaron en litis a mi representado.

## FRENTE A LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

### **PRÁCTICA DE PRUEBAS SOLICITADAS POR EL DEMANDANTE:**

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito interpuestas en contra de los hechos de la demanda, manifestamos que nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas

documentales presentadas al proceso y participar en la práctica del correspondiente interrogatorio de parte.

#### **FRENTE A LAS FOTOGRAFÍAS:**

Es preciso señalar al despacho que la prueba que el demandante denomina como “Registro fotográfico del accidente”, aportadas en la demanda, no deben valorarse con suficiencia probatoria y, por tanto, deberán desecharse para los efectos del presente proceso. Lo anterior, por cuanto, en primer lugar, tales documentos no cumplen con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 168 del CGP. En segunda medida, por cuanto dichos documentos no tienen la capacidad de demostrar a ciencia cierta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, ni tampoco las consecuencias de este. De estas fotos no es posible extraer la fecha, lugar, momento a que corresponden, tampoco si existe una relación directa con los hechos objeto de debate. En tal sentido, conforme lo dispone el artículo 272 del CGP, manifestamos DESCONOCERLAS.

#### **FRENTE A LOS TESTIMONIOS:**

La parte demandante solicita que se cite a varios testigos, sin embargo, dicha solicitud resulta genérica, vaga e inapropiada para el decreto de una prueba testimonial de conformidad con los lineamientos del Código General del Proceso, transcritos a continuación:

*“ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.”*

20

El estatuto procesal impone a las partes la obligación de determinar y delimitar de manera concreta los hechos objeto de la prueba. Este requerimiento responde a dos presupuestos probatorios:

- a. La admisibilidad de la prueba: Que una prueba sea admisible dentro de un proceso judicial requiere un estudio de legalidad y de contenido. Por lo tanto, el análisis de admisibilidad implica determinar que la prueba puede ser discutida y controvertida, que versa sobre hechos relevantes, que es idónea para demostrar aquello que se propone y que fue obtenida de manera lícita.
- b. Derecho de defensa: La parte que no ha solicitado la prueba únicamente cuenta con el escrito donde esta fue solicitada para realizar un análisis de conducencia, pertinencia y utilidad.

Por lo tanto, omitir este requerimiento legal es una falta al debido proceso, toda vez que ni el juez ni la parte demandada han tenido la oportunidad de analizar sobre qué versará el testimonio solicitado y por ende, no es posible determinar si los hechos que pretende acreditar son relevantes, si tales hechos le constan al testigo, si el testimonio es conducente para acreditar el tema sobre el cual girará la prueba o si existe otro medio que ya haya acreditado aquello que se pretende a través del testimonio.

#### **FRENTE AL DICTAMEN PERICIAL:**

Por no cumplirse con los requisitos establecidos en el Art. 227 del CGP, se deberá negar el decreto y práctica de la prueba señalada, en la medida en que no cumple con los requisitos establecidos en la norma en mención para que la prueba resulte procedente.

### **MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito que se decreten y tengan en cuenta las siguientes pruebas:

#### **INTERROGATORIO DE PARTE**

Sírvase Señor Juez, citar a el demandante Jesús Urbano Muñoz para que absuelva el interrogatorio que le formularé verbalmente o en pliego escrito que presentaré para la correspondiente audiencia sobre los hechos y pretensiones de la demanda.

#### **DECLARACION DE PARTE:**

- Con fundamento en lo establecido en la sección tercera, título único, capítulo III, artículos 165 y 191 del Código General del Proceso, comedidamente solicitamos al señor Juez, citar al señor CHRISTIAN DAVID VALLEJO ROJAS, para que rinda declaración de parte, sobre los hechos y pretensiones en que se funda la presente acción judicial, especialmente, sobre los presupuestos de modo, tiempo y lugar de como ocurrió el accidente de tránsito del 12 de enero de 2024, las causas que dieron origen al mismo y demás situaciones relativas al evento.
- Con fundamento en lo establecido en la sección tercera, título único, capítulo III, artículos 165 y 191 del Código General del Proceso, comedidamente solicitamos al señor Juez, citar al señor LUIS ALBERTO MONGE MUÑOZ, en calidad de propietario del vehículo de placas GDT868 y representante legal de IPS SAN FELIPES S.A.S. (o quien haga sus veces), para que rinda declaración de parte, sobre los hechos y pretensiones en que se funda la presente acción judicial, especialmente, sobre la propiedad del vehículo, la existencia de seguros que amparan el automotor, los presupuestos de modo, tiempo y lugar de como ocurrió el accidente y lo que dio origen al mismo, contrato de afiliación con la IPS y; demás situaciones relativas al evento.

21

#### **DOCUMENTALES**

1. Carátula de la póliza No. 900000973260 vigente desde el 31 de agosto de 2023 hasta el 12 de mayo de 2024.
2. Condiciones generales aplicables a la póliza No. 900000973260 vigente desde el 31 de agosto de 2023 hasta el 12 de mayo de 2024.

## DICTAMEN PERICIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, solicitamos que se nos otorgue un término de 30 días hábiles para aportar un dictamen pericial que versa sobre la reconstrucción del accidente de tránsito ocurrido el 12 de enero de 2024, en el cual estuvo involucrado el vehículo de placas GDT868 y el vehículo de placas SJP991, con la intención de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el mismo se presentó.

La razón por la cual dicho dictamen no se puede aportar en el término de traslado es porque el mismo es insuficiente para lograr que se lleve a cabo dicho dictamen.

## RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS:

De conformidad con los artículos 229 y 277 del CPC, solicitamos al Juez ordenar la ratificación de los documentos provenientes de terceros por las personas que los suscriben. Para lo cual la parte demandante deberá indicar, nombre completo, cedula y dirección de domicilio y residencia del mismo.

Los documentos a ratificar son:

- Contrato de compraventa del vehículo de placas **SJP- 991**.
- Declaración extra juicio de la posesión del vehículo de placa **SJP-991**.
- Cotización de las reparaciones a realizar al vehículo de placa **SJP-991**.
- Certificación de contador público sobre el producido del vehículo **SJP-991**.
- Recibos de transporte de traslados Belén – Pasto y viceversa.

22

En tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante en tanto no se obtenga su ratificación, y entre ellos, de manera enunciativa, los que se acaban de enumerar.

## AUTORIZACIÓN DEPENDENCIA JUDICIAL

Solicito que se designe como dependiente judicial al abogado **LUIS GABRIEL TIMANÁ CARDOZA**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.151.945.632 y T. P. 243.199, correo electrónico [ltimana@btlllegalgroup.com](mailto:ltimana@btlllegalgroup.com), al abogado **CARLOS ANDRES DELGADO BONILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.144.194.635 y T.P. 383.776, correo electrónico [cadelgado@btlllegalgroup.com](mailto:cadelgado@btlllegalgroup.com), a la abogada **ANDREA MERCADO ARCINIEGAS** identificada con la cédula de ciudadanía 1.047.458.009 y T.P. 303.303, correo electrónico [akmercado@btlllegalgroup.com](mailto:akmercado@btlllegalgroup.com), a la estudiante de derecho **AURA SOFIA GOMEZ MEJIA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.119.322.6858 correo electrónico [resoluciones5@btlllegalgroup.com](mailto:resoluciones5@btlllegalgroup.com) y a la estudiante de derecho **VALERIA SANCHEZ VALENCIA** identificada con cedula de ciudadanía 1.005.892.233 y al correo electrónico [resolucion10@btlllegalgroup.com](mailto:resolucion10@btlllegalgroup.com), de conformidad con sus respectivas identificaciones, tarjetas profesionales y el certificado de estudios correspondiente; para que éstos puedan tomar copias del expediente, reclamar y recibir a mi nombre

oficios, radicar documentos en nombre del apoderado principal y/o sustituto, despachos comisorios, exhortos, documentos desglosados, certificaciones, citatorios, avisos, emplazamientos, copias auténticas, o por cualquier otro concepto y se enteren de cualquier actuación dentro del presente proceso.

#### **ANEXOS**

1. Los documentos señalados en el acápite de pruebas.
2. Poder otorgado por el señor Luis Alberto Monge Muñoz que me faculta para actuar dentro de este proceso.
3. Poder otorgado por el señor Christian David Vallejo Rojas que me faculta para actuar dentro de este proceso.
4. Poder otorgado por el representante legal de IPS San Felipe S.A.S. que me faculta para actuar dentro de este proceso.
5. Copia de cedula de ciudadanía del señor Luis Alberto Monge Muñoz.
6. Copia de cedula de ciudadanía del señor Christian David Vallejo Rojas.
7. Certificado de existencia y representación legal de la IPS San Felipe S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio de Pasto.
8. Certificado de Existencia y Representación Legal de BTL Legal Group S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio de Cali.
9. Copia de la tarjeta profesional del abogado Luis Gabriel Timaná Cardoza.
10. Copia de la tarjeta profesional del abogado Carlos Andrés Delgado Bonilla.
11. Copia de la tarjeta profesional de la abogada Andrea Katherine Mercado Arciniegas.
12. Copia del Certificado de Estudios de Aura Sofía Gómez Mejía.
13. Copia del Certificado de Estudios de Valeria Sánchez Valencia.

23

#### **DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES**

1. El suscrito apoderado: En la secretaria de su despacho o en la Avenida 6 A Norte No. 25N-22 Edificio Nexxus XXV, piso 3 de la Ciudad de Santiago de Cali- Valle del Cauca. Teléfono Móvil 3185895110 y en la dirección electrónica [jlasso@btlllegalgroup.com](mailto:jlasso@btlllegalgroup.com) -[cadelgado@btlllegalgroup.com](mailto:cadelgado@btlllegalgroup.com)
2. Mi representados
  - **Luis Alberto Monge:** En la Calle 16 No. 29-63 P6, barrio San Andrés de la Ciudad de San Juan de Pasto- Nariño. Teléfono 7234657 y en la dirección electrónica: [luismongem@gmail.com](mailto:luismongem@gmail.com)
  - **IPS San Felipe S.A.S.** En la Calle 16 No. 29-63, barrio San Andrés de la Ciudad de San Juan de Pasto- Nariño. En la dirección electrónica de notificaciones judiciales [mongekarim@gmail.com](mailto:mongekarim@gmail.com)
  - **Christian David Vallejo Rojas:** En la Manzana 21, casa No 19, barrio La Minga de la ciudad de San Juan de Pasto- Nariño. En la dirección electrónica [cvrojas4321@hotmail.com](mailto:cvrojas4321@hotmail.com)
3. A las demás partes en la dirección por ellos aportada.





Con el acostumbrado respeto,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Armando Lasso Duque', written over a large, stylized 'D'.

JORGE ARMANDO LASSO DUQUE

CC. No. 1.130.638.193 de Cali (V)

T.P. No 190.751 del C. S. de la Judicatura  
Apoderado Judicial